

## Crónica del mes Octubre - 2006

La dinámica política de este mes estuvo marcada por la discusión en torno al desmascaramiento de la corrupción que atraviesan las diferentes estructuras estatales, ejemplificada en las actividades ilícitas del diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Roberto Carlos Silva. Con este último fueron relacionados un fiscal de la zona oriental y un diputado del Parlamento Centroamericano, el arenero Mario Osorto. Este flagelo —la corrupción— está estrechamente relacionado con la difícil situación del país. Por ello, el FMLN, aprovechando la celebración de su 26 aniversario de fundación, dio a conocer una propuesta de Seguridad Pública en la que se le da un tratamiento integral a la problemática de la violencia, con el objetivo de construir una sociedad pacífica y segura. En lo social, los altos índices de delincuencia llevaron al Embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, a reprender al gobierno salvadoreño por su ineptitud para combatir la criminalidad. La empresa privada hizo lo mismo y exigió una pronta acción gubernamental. A finales del mes, el gobierno de Antonio Saca ofreció más de lo mismo: una nueva ley represiva y más soldados y policías en las calles.

Asimismo, en octubre continuó la problemática entre MIDES y algunas alcaldías efemelenistas del área metropolitana de San Salvador. En medio de acusaciones de ambas partes, se llegó —gracias a la mediación de Mons. Gregorio Rosa Chávez— a un acuerdo, que puso fin al conflicto. La basura recogida por las alcaldías volvió al relleno de Nejapa. Entre tanto, otro intenso conflicto se dio entre sindicalistas y autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Lo destacable de este conflicto —motivado por demandas salariales de los primeros— fue la poca voluntad de negociación mostrada por ambas partes. Mientras que, en lo económico, un hecho relevante fue la gira asiática —de la cual se excluyó a China— realizada por el presidente Antonio Saca.

## Político

A finales del mes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Roberto Carlos Silva Pereira, de estar involucrado en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y contratos ilícitos en algunas alcaldías del país. Por ello, este diputado pasó de ser un desconocido para la opinión pública, a ser el caso ejemplar de la corrupción que impera en las esferas estatales. Así, el 3, el ex alcalde del Municipio de Berlín, Usulután, el pecenista Ramón Palma, reconoció haber realizado negociaciones ilícitas con el diputado suplente de su mismo partido. “Recibí dinero de él. El primer dinero que me entregó lo hizo porque nosotros estábamos pasando por una difícil situación financiera en la municipalidad. Él me dijo que de ganar los proyectos me iba a dar el 10 por ciento. Otros colegas lo manejaban para su beneficio personal, yo lo utilicé para las deudas de la alcaldía”, expresó Palma. Ante estas declaraciones, algunos diputados cuestionaron a la Corte de Cuentas. «Lo que el país tiene es un estado de corrupción, porque esta práctica es un modus operandi en el gobierno y [las] municipalidades», afirmó Gerson Martínez, diputado del FMLN. Martínez agregó que la Corte de Cuentas se «hace del ojo pacho» ante casos graves de corrupción. Por su parte, Ricardo Kattán, de Cambio Democrático (CD), sostuvo que el ente contralor no solo no cumple con su rol, sino que está viciado.

El 5, se integró la comisión de antejuicio de la Asamblea Legislativa para dirimir el caso del diputado Silva, siendo sus miembros los siguientes parlamentarios: Carlos Rolando Herrarte (PDC), presidente; Walter Durán (FMLN), secretario; Óscar Kattán (CD), relator. Como vocales fueron nombrados: Miguel Bolaños, Rolando Alvarenga y Mauricio Quinteros (ARENA); Irma Amaya y Arturo Fernández (FMLN); Antonio Almendáriz y Orlando Arévalo (PCN). El 16, la comisión realizó su primera reunión en la que se acordó emitir un dictamen favorable o desfavorable en torno al caso Silva, antes de los 60 días

que establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. Hasta el 3 de diciembre, la mencionada comisión recibirá de forma separada a la parte acusadora y a la defensora. Siempre el 16, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señaló que con el caso Silva se ha puesto a prueba la eficacia y credibilidad del Órgano Legislativo, en materia de lucha contra la corrupción. Es necesario “que El Salvador cuente con instituciones políticas fuertes para elevar la calidad de la democracia”, dice el comunicado que FUSADES dirigió a la Asamblea Legislativa. También se escucharon algunas voces pecenistas. Por ejemplo, para Will Salgado, alcalde del municipio de San Miguel, es necesario desaforar a Silva, “para que un juez lo pueda condenar o dejarlo libre, tiene que ser un ciudadano común y corriente”. “Yo no sé cuál es la postura del partido, esta es la postura de Will Salgado”, sostuvo en una entrevista publicada por *El Faro*, el 16 de octubre de 2006. Por su parte, Elizardo Lovo, diputado propietario por el PCN —y con cuyo apoyo Silva llegó a la Asamblea—, aseguró que no hay lavado de dinero, pues “en este caso de las empresas del diputado Silva, el dinero tiene origen y condiciones bajo los que se firmaron los contratos”, dijo. Y añadió: “cuando uno ve este tipo de cosas hay que tener temor. Si mañana me aparece un costal de cocaína en el carro me lo han llegado a poner. Estos son capaces de todo. Pueden arrimarle cualquier delito para bajarle popularidad”.

El 18, salió a luz pública otro involucrado en este caso de corrupción. Se confirmó oficialmente que el jefe de la Fiscalía de Usulután, José David Amaya Ábrego, estaba sometido a una investigación por sus vínculos laborales y de amistad con el diputado Silva Pereira. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que se confirmó que Amaya había sido removido de su cargo, porque había brindado servicios como notario —algo prohibido por la ley orgánica del Ministerio Público— al diputado Silva, en un trámite de traspaso de bienes a favor de este último. Un día después, Amaya declaró a *La*

*Prensa Gráfica* que sí había tenido relación con el diputado Silva. “Los servicios que brindé —dijo— eran autorizaciones de contratos que él contraía con otras personas. Como notario, no estoy obligado a saber si eran irregulares o no, o la forma cómo esta persona los había obtenido”. Por su lado, el Fiscal General, Félix Garrid Safie, aclaró que a Amaya le había perdido la confianza y que, por lo tanto, ya no podía representar al fiscal general.

Por último, siempre en relación con este caso, el 24, Mario Antonio Osorto Vides, ex alcalde arenero de La Unión y diputado electo para el PARLACEN, aceptó que tres proyectos ejecutados durante su administración fueron entregados a empresas del diputado Silva. Sin embargo, en su defensa, Osorto aseguró que las licitaciones fueron legales y que contaron con el aval del ex concejo. El Fiscal Garrid Safie pidió a la Asamblea Legislativa el antejuicio respectivo contra el diputado Osorto, acusado de los delitos de concusión, falsedad material y negociaciones ilícitas. Al respecto, el ex alcalde unionense aseguró que no había sido notificado por la Fiscalía de las acusaciones en su contra. Añadió que era respetuoso de las leyes y que estaba de acuerdo con someterse a una investigación, aunque aseguró que antes de desaforarse voluntariamente tendría que ser asesorado por sus abogados. Por su parte, el presidente Antonio Saca —hablando en nombre del COENA— pidió a Osorto renunciar al fuero político para ser enjuiciado como es debido. El diputado del PARLACEN —quien asumió su cargo el 28 de octubre sin mayor inconveniente— no se hizo cargo de la petición de Saca. “Yo tuve una reunión con el COENA y les expliqué cómo había sido el proceso de la adjudicación de los proyectos realizados, y ellos me manifestaron que yo tomara la decisión que creyera conveniente. Respeto las decisiones del partido y a sus autoridades en ningún momento las estoy involucrando en este problema... el partido no me ha apoyado y yo respeto la decisión del presidente”.

En otro orden, el 10 de octubre, El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

(FMLN) celebró sus 26 años de existencia. Para celebrarlo, tres días antes, realizó, en el Estadio Cuscatlán, un “Encuentro por la paz”, al que acudieron más de 30 mil simpatizantes. En ese marco, este instituto político planteó una propuesta que ataca integralmente el fenómeno de la delincuencia. “Queremos hacer una propuesta de estrategia efectiva para combatir la delincuencia. Seguramente habrá aspectos que haya que perfeccionar, afinar. La ofrecemos al país, a todos los sectores: comunidades, universidades, iglesias, gremios, sectores políticos, al gobierno mismo, para que sea discutida, confrontada; para finalmente llegar a grandes acuerdos que sean rápidamente aplicados para beneficio del país. El momento exige abrir un auténtico y transparente diálogo nacional sobre un problema que ahoga a toda la sociedad salvadoreña, como es la delincuencia de todo tipo y tamaño”, se lee en el documento titulado “Propuesta del FMLN y discurso del Coordinador General, Medardo González, durante el primer encuentro por la paz, la seguridad y la justicia social”.

En su propuesta, el partido de izquierda señala que para enfrentar el problema de la violencia es necesario fijarse en las causas estructurales que llevan a la misma: “primero que todo, el modelo económico y político neoliberal que incrementó la pobreza y la división social, elevando los índices de exclusión por lo que las mayorías no tienen acceso a niveles de vida adecuados, como alimentación, salud, educación, vivienda y servicios básicos. Además el aumento en los niveles de concentración de la riqueza que produce el país, que va a parar a los bolsillos de pocas familias poderosas y que dentro de sus prioridades no está la seguridad de las personas”. A partir de este análisis, el FMLN propone su estrategia para combatir integralmente la delincuencia con la participación protagónica de la ciudadanía, alcaldías, iglesias, empresa privada, gobierno y las deferentes instituciones estatales encargadas de la seguridad pública. En síntesis, el FMLN recomienda el control sobre las armas, el fortalecimiento de la PNC, las políticas municipales de con-

vivencia social y estrategias de prevención que ataquen las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas.

Finalmente, como otro hecho lamentable, el 20, se registró la muerte, en Irak, del capitán José Argelio Soto Ochoa, de 39 años, quien pereció cuando escoltaba un convoy que transportaba alimentos desde el campamento Echo, en Diwaniya, hacia el campamento Delta, en Al Kut, sede de la tropa salvadoreña. El incidente, que dejó lesionados a cuatro militares del batallón Cuscatlán VII, ocurrió a las 5:45 de la tarde, hora de Irak (8:45 de la mañana, hora de El Salvador). Los lesionados fueron identificados como el Subsargento José Armando Morales, los cabos Armando Platero Marroquín e Isidro Méndez Ascencio, y el soldado Julián Eduardo Vásquez. El 28, los restos del capitán Soto fueron trasladados desde Irak, en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, hasta el aeropuerto de Ilopango, donde se encontraban los familiares de la víctima, altos mandos de Fuerza Armada y la Vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar. Pese a las víctimas mortales habidas hasta ahora y pese a la fuerte oposición social y política existente en el país, el gobierno de Antonio Saca no da señales de querer suspender el envío de más tropas salvadoreñas a Irak.

## Social

Arrancando el mes de octubre, el tema del combate a la delincuencia comenzó a ser el plato fuerte del quehacer social nacional. El 2, en el editorial de *La Prensa Gráfica*, se señalaron dos aspectos de suma importancia para ese afán. El primero tiene que ver con el mito de la seguridad personal lograda con la portación de armas. Para el editorialista, «el dato irrefutable según el cual, de las personas armadas que son agredidas con armas de fuego, sólo el 5% logran superar el ataque debería ser más analizado a la hora de tomar decisiones legales e institucionales sobre esta cuestión, que desgraciadamente ya está contaminada, tanto de

intereses económicos como de intereses políticos». El segundo aspecto guarda relación con el argumento principal del presidente Antonio Saca y del partido ARENA sobre su negativa a despistolizar a la sociedad. «El argumento —dice el editorialista— de que no se puede hacer prácticamente nada al respecto porque sería dejar desprotegida a la población honrada es, de entrada, un argumento capcioso. La institucionalidad debería hacer una limpieza efectiva de armas en manos de antisociales y delincuentes como primera medida para sanear el ambiente».

Mientras la discusión en torno al auge delincencial seguía su curso, el 3 se dio un nuevo hecho delictivo, cuando fueron asesinados Jesús Mejía y Santos Ramos, cobrador y motorista, respectivamente, de un microbús de la ruta 140. En el primer viaje del día, cuando se dirigían de San Salvador a San Martín, cinco sujetos abordaron el microbús en el parque Zurita y al llegar a la altura de la Terminal de Oriente, obligaron a Ramos que se desviara de su camino en dirección a Altos del Bulevar, en San Salvador. Allí fueron asesinados, frente a los pasajeros, él y Mejía. Según los familiares de las víctimas, el crimen se debió a problemas relacionados con las extorsiones. Horas más tarde, los trabajadores de esa ruta bloquearon la carretera Panameñicana, a la altura de Ilopango y San Martín, en protesta por el asesinato de sus compañeros. «Ya es demasiado, ya son muchas muertes que se han dado en la ruta», dijo un conductor que no quiso ser identificado. Motoristas y cobradores de la ruta 140 exigieron mayor protección de la Policía Nacional Civil, sin que se supiera de una respuesta concreta de las autoridades a esa demanda.

En la misma línea, el 16 de octubre, el Embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Barclay, exigió al gobierno, en un foro realizado por FUSADES, enfrentar con eficacia el problema de la delincuencia y la criminalidad. En efecto, luego de ensalzar el rumbo económico y político del país en los últimos años, Barclay reconoció que en la actualidad se están «enfrentando problemas serios problemas que amenazan con detener

el crecimiento económico, parar la inversión extranjera e, inclusive, deshacer muchos de los logros alcanzados desde los acuerdos de paz”. El diplomático se refirió a la delincuencia, a la corrupción y a la politización partidista de esos problemas que, aunque no lo dijo explícitamente, hacen tanto el FMLN como ARENA. Barclay citó como muestra del alto índice de violencia el hecho de que “en un día promedio en El Salvador, diez personas son asesinadas. Hace tan sólo dos semanas, el 3 de octubre, hubo 22 asesinatos, sólo en ese día”. Y es que, para él, la situación es grave porque principalmente afecta la inversión. “Cuán gravemente está afectando el crimen a su economía”, lamentó Barclay, quien, además dejó entrever el peligro que ello representa por su potencial destructor de “todas las oportunidades creadas por CAFTA, por el Acuerdo de la Cuenta del Reto del Milenio y por otras iniciativas comerciales y económicas”.

La sugerencia de sacar más policías a las calles para enfrentar la delincuencia fue aprovechada por la prensa de derecha como lo más importante del discurso de Barclay. Empero, este fue más allá: “no estoy diciendo que el sacar de las calles a los criminales violentos sea la solución completa; la prevención, rehabilitación y medidas de reforma a medio y largo plazo son también necesarias”; es decir, lo importante es darle una solución integral al problema de la violencia y no solo —como hasta ahora lo han venido haciendo los gobiernos de ARENA— quedarse en la parte represiva. Asimismo, el diplomático se refirió a la necesidad de que quienes evaden el pago de sus impuestos no lo hagan más. “Los salvadoreños —dijo— deben pagar sus impuestos. No hay espacio para gorriones que le roban la posibilidad de un mejor futuro para sus conciudadanos. ¿Están ustedes preocupados de cómo su gobierno va a gastar el dinero que tanto les ha costado ganar? No pagar sus impuestos no es la respuesta a esta preocupación”, sino exigir transparencia y “que los funcionarios corruptos sean expuestos y llevados a la justicia”. Por último, el embajador estadounidense hizo un llamado, que

tanto ARENA como el FMLN interpretaron a su conveniencia. “Las elecciones son importantes —he participado en muchas, y yo sé lo que está en juego para cada partido político antes de las elecciones—. Yo sé que ustedes quieren ganar las elecciones. Pero la mejor manera de ganar las elecciones es mantener los intereses de los ciudadanos en mente cuando estén buscando objetivos políticos. ¡Háganlo!”.

“Compartimos el llamado urgente a la unidad, para resolver este problema”, expresó Sigfrido Reyes, vocero oficial del FMLN, quien incluso ironizó diciendo que quizá algún miembro de su partido escribió el discurso de Barclay. En ese mismo sentido, Beatrice de Carrillo, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, consideró que “de alguna manera, varias de las afirmaciones de Barclay han sido planteadas constantemente por la PDDH, con la diferencia de que la preocupación central del embajador es el costo económico de la criminalidad, mientras que para la Procuraduría es la vida y la seguridad de la población”. Mientras que, por el lado de ARENA, el diputado Guillermo Gallegos se empeñó en defender los programas de gobierno en relación con la seguridad ciudadana. “Es como una recomendación, como sugerencia de lo que se debe hacer. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo”. Por su parte, René Figueroa, ministro de Gobernación, aseguró que el gobierno realiza una “franca batalla contra la delincuencia. Estamos conscientes de que seguridad es sinónimo de desarrollo”. El ministro aprovechó la ocasión para decir que Estados Unidos puede contribuir a reducir la violencia en el país si frena la deportación de delincuentes.

Tomándole la palabra al embajador Barclay, el 20 de octubre, las cúpulas de la empresa privada, encabezadas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dieron a conocer su postura sobre la crítica situación de inseguridad. Sostuvieron que se deben revisar los gastos del Ejecutivo, sobre todo en el área de la publicidad, recortar el presupuesto en distintas carteras y hacer una eficiente asignación de los fondos con la

finalidad de dotar de más recursos y personal a las entidades encargadas de velar por la seguridad en el país. Además, descartaron tajantemente el “impuesto de emergencia” propuesto por Barclay. Según Napoleón Guerrero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), los planes de seguridad impulsados por el gobierno no han sido efectivos. “Sólo basta ver los resultados. ¿Qué le dice a usted que los niveles de delincuencia hayan crecido en lugar de bajar?”, resumió. Según Federico Colorado, presidente de la ANEP, “hemos visto los planes, no han sido planteados en un contexto integral. No se han dado los resultados esperados. Ahí tiene que haber una reflexión grande sobre cuáles son las políticas que necesita el país”. Finalmente, los empresarios dieron una especie de ultimátum al gobierno, a través de Elena de Alfaro, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES). “Estamos reclamando una pronta acción” al Ejecutivo para que implemente acciones claras de combate a la delincuencia. De lo contrario, seguirán con campañas contra la violencia, marchas y concentraciones masivas. Hay quienes no descartan incluso ‘ir a paros’”, amenazó de Alfaro.

Como quiera que sea, la gran empresa privada salvadoreña no está exenta de responsabilidad en lo que le sucede al país en materia de seguridad pública, pues ella ha apoyado siempre a los gobiernos de ARENA, beneficiándose de sus desatinos. Mucho del deterioro social e institucional del país es responsabilidad del sector empresarial más poderoso. Ya es hora de que este sector asuma su cuota de culpa por lo mal que está El Salvador. En este sentido, el 26, Eduardo Guerrero, representante en El Salvador de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se refirió al tema de la violencia, a propósito de las diferentes críticas al gobierno por el mal manejo de la seguridad pública, asegurando que “el fenómeno de la violencia no se le puede atribuir sólo a la policía. Los empresarios, en lugar de exigir a la Policía, deben preguntarse cómo crear una empresa inclusiva donde le den prioridad a los adolescentes y se unan

con institutos tecnológicos para crear una sociedad diferente... es parte de la responsabilidad empresarial”.

Diez días después del llamado realizado por los empresarios, el 30, el presidente Saca encabezó un acto en el que recibió de manos del ministro de Gobernación, René Figueroa, una propuesta de ley contra el crimen organizado y ofreció 4 mil efectivos, entre soldados y policías, para fortalecer los patrullajes en las calles. Al acto, realizado en Casa Presidencial, estaban invitados los otros dos poderes del Estado, la empresa privada y los partidos políticos. Asistieron todos los invitados, menos el FMLN, que, sin embargo, ofreció sentarse con el Ejecutivo a hablar sobre el tema de seguridad pública. Con este ofrecimiento, Saca puso el “broche” a una serie de reuniones que el ministro Figueroa coordinó con empresarios, magistrados y políticos para elaborar la ley especial que, como puntos novedosos, incluye la eliminación del juez de Paz en los procesos por crimen organizado, la inclusión de 17 delitos en esa tipificación y la creación de tribunales especiales. La reunión en Casa Presidencial fue, además, la primera respuesta oficial y pública del Ejecutivo, acompañado por el Judicial y el Legislativo, a las exigencias hechas por la empresa privada durante las últimas semanas ante la inseguridad que vive el país. La primera reacción de los empresarios, en voz de Federico Colorado, presidente de la ANEP, fue de satisfacción: “es una excelente noticia y una excelente señal para el país”, dijo Colorado. Pese a este optimismo, quedan fuera de esa primera iniciativa el ataque a la corrupción, al narcotráfico y, en general, las medidas económicas en pro de un tratamiento integral a la problemática de la violencia. En este sentido, este primer paso es insuficiente para contribuir a contraatacar la violencia que mantiene a El Salvador como el más violento de América Latina.

Otro hecho relevante en el ámbito social fue la huelga realizada por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS). El día 16 de octubre,

12 unidades de la red del Seguro Social fueron bloqueadas por los sindicalistas, comenzando así un movimiento de protestas ante la negativa de la dirección de la institución de conceder un incremento salarial a los trabajadores y trabajadoras del ISSS. “Solamente es una actividad de protestas donde no se están dejando entrar a las jefaturas de cada hospital”, manifestó Carlos Alberto García, Secretario de conflictos del sindicato. Según García, llevaban varios meses negociando el aumento de salario, con una comisión nombrada por el consejo superior del ISSS; no obstante, se rompió la mesa porque se solicitaban 100 dólares de aumento y la dirección sólo aprobó 35 dólares. Según los directivos del STISSS, desde el momento que iniciaron las conversaciones, Nelson Nolasco, director del ISSS, se aferró a la tesis de que no había fondos. Sin embargo, “en publicidad televisiva gastan millones todos los meses, gastan en cosas innecesarias también como viajes al hotel Bahía del Sol”, aseguró el líder sindical. El salario promedio que se registra para los trabajadores del ISSS oscila entre los 330 a los 400 dólares mensuales, y el mismo no se ha modificado desde 1998.

El 18, las siguientes unidades médicas apoyaban el paro: Zacamil, Aguilares, Santa Tecla, Atlacatl, Apopa, Nejapa, 15 de Septiembre, Lourdes, Ateos, Usulután, San Vicente, San Jacinto, Santiago de María, Zatecoluca, Chalatenango y Puerto El Triunfo. Y los hospitales General, Amatepec, 1° de Mayo y el Neumológico. Siempre el 18, Nolasco manifestó su descontento con el paro de labores en unidades de salud y hospitales. “No tiene ninguna justificación —afirmó— haber tomado medidas de hecho, porque no se les está violentando ningún derecho laboral. El aumento salarial estaba siendo negociado hasta donde la capacidad financiera del instituto lo permite”. Y como medida alternativa, Guillermo Maza, ministro de Salud, confirmó la apertura del sistema público a los pacientes del ISSS. La medida se dio sin que se tuviera seguridad de que habría compensaciones. “Vamos a hacer todo lo posible porque los derechohabientes no se queden

sin servicio médico, eso [el pago] lo vamos a ver en el camino”, afirmó Maza.

El 20, el secretario general del STISSS, Jaime Ávalos, admitió que el aumento salarial de 100 dólares para cada empleado era el motor de sus protestas, pero también las relacionó con el combate a la corrupción dentro de la institución. En una entrevista realizada por *La Prensa Gráfica*, Ávalos argumentó que “un trabajador cuya situación económica esté bien, lógicamente la atención que va a brindar es mejor. Estamos conscientes de que hay que mejorar la atención a los usuarios del Seguro Social, por eso hemos planteado que se forme una comisión de investigación de la corrupción del ISSS”. Además, planteó que la protesta no se reduce al mero reclamo salarial, pues “también estamos buscando la mejora del servicio de los derechohabientes. Lo que no se dice es que fuimos nosotros, en la lucha que tuvimos contra la privatización, los que logramos la cobertura de hasta 12 años para los hijos de los derechohabientes”. Ávalos recalcó que fue la intransigencia de las autoridades para negociar lo que llevó a la acción de protesta, ya que “estábamos confiando en que el director era inteligente y que iba a negociar en la mesa”. El 26, el STISSS se reunió con autoridades del Seguro Social en una mesa de negociación para encontrar una solución a la demanda de aumento de salario. Las posturas de ambas partes fueron las mismas de siempre: el STISSS exigió 100 dólares de aumento y la patronal ofreció 35 dólares.

En este contexto, el 27, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) hizo un llamado al sindicato y a la dirección del ISSS para que dialogaran en serio para solucionar lo más pronto posible el conflicto en el Seguro Social. Beatrice de Carrillo, procuradora de Derechos Humanos, dijo que la táctica utilizada por el sindicato es de “choque”, y que “los derechohabientes han quedado en el aire”. Además, la Procuradora instó al Ministerio de Trabajo a tener un mayor protagonismo en el conflicto. “Este es un problema netamente interno del Seguro

Social y no tiene porque afectar a los de-rechohabientes”, insistió de Carrillo.

Voceros del STISSS sostuvieron que en la nueva mesa de negociación persistía la falta de voluntad por parte de la patronal. El secretario general del STISSS, Jaime Ávalos, aseguró que en esa mesa se detectaba siempre la negativa del director del ISSS, Nelson Nolasco, quien ni siquiera se presentó a la mesa del pasado 26. “El director no piensa en los pacientes de los hospitales, con su falta de voluntad lo demuestra”, señaló Ávalos, quien manifestó que si en la mesa de negociación persiste la indiferencia, “esto sólo dilatará el conflicto en el Seguro [Social]”. Con todo, en el marco del deterioro del movimiento sindical salvadoreño, que el STISSS tenga la capacidad de enfrentarse a las autoridades no deja de ser importante. Pero el costo de ello lo pagan quienes no deben nada: los pacientes. Los sindicalistas, nuevamente, han utilizado métodos con los que no se ganan el apoyo y la simpatía de aquellos a quienes buscan servir, pues el conflicto con ellos es evidente. Y en el fondo eso es lo que buscan las autoridades, para luego acusarlos de terroristas y violentos; evadiendo su responsabilidad en la pésima gestión del sistema de salud.

Por otro lado, desde el mes anterior se hizo patente la problemática de la basura y los intereses electorales de fondo en ella. A partir del 5 de octubre, se normalizó el funcionamiento del relleno de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), al recibir los camiones con basura de las alcaldías a las que días atrás se les habían cerrado las puertas del botadero. La discusión sobre la compra del relleno por parte del COAMSS o COMURES se dio a partir de declaraciones hechas por Enrique Rais, asesor de la empresa de desechos, en el sentido de que la empresa MIDES sería vendida. Según Fidel Fuente, edil de san Marcos, «que nos notifiquen cuánto es la base real si están hablando en serio. Es que MIDES cierra y no nos notifica, sino a los medios; nos abre y no nos notifica; y ahora vende y se los notifica a los medios». La historia parecía cerrada, pero,

el 18, nuevamente la empresa de MIDES le cerró las puertas del relleno sanitario a las nueve alcaldías del área metropolitana de San Salvador, pese a que ambas partes estaban en una mesa de diálogo, moderada por monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Por ello, las comunas protagonizaron una serie de protestas como el desfile de más de 75 camiones recolectores frente a las instalaciones de la residencia presidencial en la colonia Escalón, y en MIDES, lugar este último donde amenazaron con tirar varias toneladas en la calle principal para exigir una solución a corto plazo. Orlando Zepeda, presidente de MIDES, consideró la protesta como una “amenaza” y una “agresión” al proceso de negociación que, según él, estaba en marcha. “No vamos a aceptar amenazas ni a seguir un diálogo estéril”, sentenció el ex miembro de la Tandon. Mientras que Elizardo Sigarán, concejal de la alcaldía de Mejicanos, hizo el siguiente llamado: “exigimos a MIDES que respete la mesa de negociación”.

El día 19, durante una reunión extraordinaria en las instalaciones de la parroquia San Francisco, en San Salvador, las partes en conflicto, bajo la mediación de monseñor Rosa Chávez, acordaron, entre las 8:30 de la noche y la 1:30 de la madrugada del siguiente día, la cancelación del 60 por ciento de la mora que las alcaldías tienen con MIDES. Asimismo, se determinó que el 40 por ciento restante sería cancelado a través del cobro de los recibos de energía eléctrica como garantía de pago. Este acuerdo dio paso para la reapertura del relleno a las alcaldías en cuestión.

Finalmente, el 27, MIDES se disculpó públicamente a través de un comunicado en el que, además, confirmó la tesis de que detrás de la problemática de la basura hay una fuerte campaña política a favor de ARENA. “Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados durante la reciente crisis de los desechos sólidos, originada por la falta de pago por parte de 9 alcaldías del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”. A su vez, los empresarios



vinculados a MIDES dijeron estar “horrorizados” con tan solo escuchar sobre un foro convocado por la comuna capitalina para discutir la nacionalización o municipalización de la empresa. “Es un claro atentado contra la democracia y pone en evidencia las verdaderas intenciones de la Alcaldía que solo se ven en países comunistas y totalitarios”.

Respecto a temas ambientales, el día 4, se realizó en el país un foro sobre los sistemas hídricos. El foro fue convocado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Este organismo realizó un estudio en el que ubicó a El Salvador con alto grado de «estrés hídrico», superado solo por Haití. Esto significa que hay poca disponibilidad de recursos hídricos, mal uso de estos y un alto riesgo de sequías en todo el territorio nacional. Según expertos, en el año 2025, si no se toman las medidas necesarias para hacerle frente a esta crisis, se caerá en una situación catastrófica de disponibilidad de agua. Esta situación se debe fundamentalmente a dos situaciones: la poca aplicabilidad de las normas ambientales y la falta de visión ecológica de las empresas que explotan el vital líquido. Un ejemplo fáctico de esta tesis es la construcción del anillo periférico y la construcción de las presas El Cimarrón y El Chaparral: «estos proyectos indican que se están observando más los valores económicos, de rentabilidad y de competencia que las necesidades humanas y del ambiente», señaló Javier Borgantes, presidente del Tribunal. El país cuenta con una de las tasas más altas de extracción de agua de la región, pero, «de nada sirve si a la larga esto generará escasez para las terceras generaciones», aseguró el experto en biología del TLA, Ricardo Valverde.

Por último, el 10, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil decretaron alerta verde en las cercanías del volcán Chaparrastique, ubicado en el departamento de San Miguel, debido a un incremento súbito de su actividad sísmica. “Recomendamos a nuestro pueblo miguelense que se mantenga pendiente. El centro de operaciones de emergencia estará activado las 24 horas, pero mantengámonos pendientes”, informó Salva-

dor Rosales, director de Protección Civil. Carlos Pullinger, director de geología del Servicio de Estudios Territoriales (SNET), aseguró que “la actividad bastante anómala que se presenta puede representar (*sic*) una cierta probabilidad de que haya erupción, pero no se puede afirmar tan tajante” (*sic*). Además, Pullinger explicó que el conducto del volcán está cerrado por un deslizamiento que se dio en 2002. La acumulación de esos gases podría generar una erupción de tipo freático. Al cierre del mes, no se había registrado ningún hecho lamentable, y sí la falta de planes de evacuación, en caso de erupción, de la población que habita las zonas de mayor riesgo.

### Económico

En el quehacer económico del mes de octubre, el Ministerio de Economía (MINEC) confirmó, el 13, la existencia de algunos problemas para el abastecimiento de gas licuado, debido a las dificultades que tuvo la empresa Tropicgás de sacar el producto de las aduanas, lo cual derivó en un abastecimiento irregular de la empresa en Ilopango y Soyapango. “El viernes pasado, Tropicgás tuvo nuevamente problemas de desaduanaje”, informó Yolanda de Gavidia, titular de Economía. Sin embargo, la funcionaria aclaró que la planta de Soyapango está siendo reabastecida paulatinamente. En un tono más conciliador que en otras ocasiones, pidió “paciencia” a los consumidores: “yo quisiera pedir un poquito de paciencia, sobre todo en esas plantas donde había un poco de desabastecimiento, no total, porque hemos chequeado los inventarios. Lo que ha sucedido es que están llenándose paulatinamente las plantas, pero creo que la solución está caminando”, indicó. Esta no es la primera vez que la empresa Tropicgás tiene problemas con el suministro del gas licuado para el consumo de hogares. De hecho, el mes pasado, el Ministerio de Economía aplicó una medida que habilitaba a otras compañías a llenar los tambos de Tropicgas para mantener el suministro del producto. La medida gubernamental fue calificada de “precipitada” por Marco Martínez, director general de la

empresa, misma que también enfrenta una demanda de la Defensoría del Consumidor por 275 mil dólares por peso inexacto.

Siempre en el plano económico, el 18, el presidente Antonio Saca inició en Taipei los actos oficiales de su anunciada gira asiática de dos semanas, que lo llevó de Taiwán a Japón y a Corea del Sur, acompañado por el canciller Francisco Laínez, la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia; el ministro de Turismo, Rubén Rochi, y una comitiva de empresarios, entre los que figuró en primera línea Ricardo Poma. “Asia representa para El Salvador la oportunidad de mirar a la innovación”, dijo el mandatario pocos minutos antes de aterrizar en la capital taiwanesa. Los encuentros con empresarios locales y la negociación de incentivos para la inversión, así como fondos de cooperación, fue la constante en una agenda que, tras el anuncio de que no se firmaría aún el tratado de libre comercio con Taiwán, prometió su momento cumbre en el encuentro simbólico entre Saca y los emperadores de Japón, que le impusieron el gran cordón de la Orden Suprema del Crisantemo, la máxima distinción de ese país a un extranjero. Pero esta gira, paradójicamente, estuvo marcada por la ausencia de dos países que no estuvieron incluidos en el itinerario: China y Corea del Norte. En El Salvador se dio un debate entre los empresarios salvadoreños y algunos miembros del gobierno sobre los beneficios de la relación con Taiwán frente al potencial mercado de

China. Representantes de la ANEP cuestionaron la negociación de cuotas azucareras con Taiwán y reclamaron la apertura de una oficina comercial en Pekín, capital de China.

Finalmente, el 22 y 23 de octubre, los representantes de las Casas de la Amistad de China en Centroamérica, así como empresarios de los diversos países del área tuvieron un encuentro en México: el “Primer Foro China-Centroamérica”. Manuel Flores, edil efemelenista de Quezaltepeque y uno de los organizadores, afirmó que “la idea es que este foro sirva para acercar a los países y abrir camino para fortalecer el comercio”. Por su parte, Fernando Castro, de Guatemala y representante de la Casa de la Amistad con China en ese país, agregó: “los países no se pueden quedar con Taiwán, porque las oportunidades comerciales con China son grandes”.

En definitiva, cerca del final de 2006, los diferentes dinamismos políticos, sociales y económicos ponen en evidencia ante la opinión pública los graves problemas por los que atraviesa el país, así como la correspondiente incapacidad del gobierno por hacerles frente. Sin duda este es un tiempo clave, en el que se deben tomar medidas que mejoren las condiciones económicas, políticas y sociales de la población en general. Es el momento de cambiar el rumbo del país, pues, de lo contrario, la crisis existente puede derivar en un caos social absoluto, del cual será difícil (si no imposible) salir.